

**Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 02 de Barcelona**

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935548451  
FAX: 93 5549781  
EMAIL: contencios2.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801945320228010903

**Procedimiento abreviado 521/2022 -Y**

Materia: Contratación y convenios (Proc. Abreviado)

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:  
Para ingresos en caja. Concepto: [REDACTED]  
Pagos por transferencia bancaria [REDACTED]  
Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 02 de Barcelona  
Concepto: [REDACTED]

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: [REDACTED]

Procurador/a: [REDACTED]

Abogado/a: [REDACTED]

Parte demandada/Ejecutado: AJUNTAMENT SANTA PERPETUA DE MOGODA

Procurador/a: [REDACTED]

Abogado/a: [REDACTED]

**SENTENCIA Nº 120/2025**

En Barcelona, a treinta de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos por mí D. [REDACTED], Magistrado-Juez titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Barcelona, los presentes autos de Procedimiento Abreviado nº 521/2022, derivados del recurso contencioso-administrativo interpuesto por [REDACTED] representada por la Procuradora de los Tribunales [REDACTED] y asistida por el Letrado D. [REDACTED], contra el AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, representado por el Procurador de los Tribunales [REDACTED] y asistido por el Letrado [REDACTED], dicto la presente Sentencia.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** En fecha 31 de octubre de 2022 la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> [REDACTED], en representación de [REDACTED], interpuso recurso contencioso-administrativo frente al Decret número 2022/2013 dictado por el Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals del Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en fecha 5 de agosto de 2022, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decret número 2022/1496 dictado por el mismo órgano en fecha 22 de junio de 2022, por el que se acuerda no devolver y confiscar a [REDACTED] la garantía por importe de 4.497 euros por cumplimiento no satisfactorio de la ejecución del contrato.

**SEGUNDO.-** Mediante Decreto de fecha 23 de octubre de 2023 se acordó admitir a trámite el recurso y la demanda presentados, requiriendo a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo y convocando a las partes a la celebración de una vista.

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:  
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:

Data i hora  
05/06/2025  
15:25

Signat per [REDACTED]



**TERCERO.-** En la fecha señalada se celebró la vista, con el resultado que obra en la grabación unida a las actuaciones.

**CUARTO.-** La cuantía del presente procedimiento es de 4.497 euros.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto el Decret número 2022/2013 dictado por el Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals del Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en fecha 5 de agosto de 2022, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decret número 2022/1496 dictado por el mismo órgano en fecha 22 de junio de 2022, por el que se acuerda no devolver y confiscar a [REDACTED] la garantía por importe de 4.497 euros por cumplimiento no satisfactorio de la ejecución del contrato.

**SEGUNDO.-** La parte actora solicita en su escrito de demanda que se anulen las resoluciones impugnadas y se condene al Ayuntamiento demandado a devolver al recurrente la garantía incautada de 4.497 euros más los intereses correspondientes. Alega como fundamento de su pretensión que el Ayuntamiento considera que ha existido un cumplimiento insatisfactorio del contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección de obras de la rehabilitación de la nave grande del Vapor, adjudicado a la recurrente, en relación con la gestión documental y económica, que justifica la confiscación de la garantía, pero ni los pliegos técnicos ni los administrativos prevén ninguna penalidad para el caso de una defectuosa gestión documental, ni se cuantifica ningún daño producido al Ayuntamiento por la presunta mala gestión; que la jurisprudencia entiende que esta penalidad tiene la naturaleza de una multa coercitiva, y por tanto debe tener como única finalidad procurar el cumplimiento del contrato, por lo que carece de sentido imponer la multa cuando la documentación ya se ha entregado, el contrato se ha ejecutado y la obra se ha recepcionado; que se ha dictado la resolución penalizadora de forma directa, sin propuesta previa ni el trámite de audiencia que exige la jurisprudencia antes de imponer una penalización, que constituye un motivo de nulidad de la resolución recurrida conforme el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015; que en el Decret 2021/2290 el Ayuntamiento reconoce que la desviación económica fue acreditada y justificada en el expediente de obras y ha sido expresamente aceptada por el Ayuntamiento, y no ha existido ningún retraso en la justificación documental requerida por el Ayuntamiento; que según el artículo 88 de la Ley de Contratos del Sector Público vigente al momento de los hechos la garantía responde de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, pero en este caso ni ha habido daños o perjuicios ni ha habido mala ejecución del contrato; y que la actuación municipal supone una revisión de oficio de los propios actos al margen de los trámites previstos en el artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015, que constituye otro motivo de nulidad conforme el artículo 47.1.e) de la misma Ley.

La Administración Pública demandada defiende la legalidad de la actuación administrativa impugnada, alegando que la garantía formalizada por el contratista debía responder de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, según la Ley de Contratos del Sector Público; que en este caso no se ha producido una ejecución correcta de las prestaciones que prevé el contrato, porque la recepción de la obra tuvo lugar más de cinco años después de formalizarse el contrato cuando la ejecución tenía prevista una duración de 18 meses, retraso que no se justifica por la





pandemia del Covid-19 dado que la obra estuvo parada por este motivo poco más de dos meses; y que no se trata de la imposición de ninguna penalidad, sino de una facultad que tiene el Ayuntamiento para confiscar la garantía cuando la ejecución del contrato no ha sido satisfactoria.

**TERCERO.-** El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la actuación municipal que acuerda confiscar a [REDACTED] la garantía prestada por importe de 4.497 euros debido al cumplimiento no satisfactorio de la ejecución del contrato.

Consta en autos que [REDACTED] se adjudicó, en virtud del Decret número 2016/760, de 3 de mayo de 2016, el contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, control de calidad, dirección facultativa y documentación final de obra de la rehabilitación de la nave grande del Vapor por un importe de 108.839,50 euros IVA incluido (folio 28 del expediente administrativo).

En el contrato formalizado entre [REDACTED] y el Ajuntament de Santa Perpétua de la Mogoda en fecha 20 de mayo de 2016 (Documento nº 3 de la demanda) se establece que, en todo lo no previsto en el contrato o en los pliegos de condiciones particulares o generales, regirán las normas del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, así como la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El Decret número 2022/1496, de 22 de junio de 2022 (folios 1.322 a 1.320 del expediente administrativo), por el que se acordó la incautación de la garantía, fundamenta la confiscación en virtud del artículo 111 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone que no procede la devolución de la garantía si no se ha cumplido satisfactoriamente el contrato, y que en este caso el informe de [REDACTED] señala que la ejecución del contrato por parte de la dirección facultativa no fue satisfactoria en su vertiente documental.

Y el Decret número 2022/2013, de 5 de agosto de 2022 (folios 1.366 a 1.374 del expediente administrativo), por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el anterior Decret número 2022/1496, concreta, al reproducir el informe emitido por la técnica superior en Derecho de la Unitat de Contractació i Compres, que no nos encontramos ante la imposición de una penalidad:

*«- No estem davant d'una penalitat, no s'ha instruït cap procediment de penalitat, ja que en el plec de clàusules administratives, a la clàusula 1.21 que regula les penalitats, no s'estableix cap penalitat per compliment defectuós.*

*- Ens trobem en el supòsit que ha finalitzat el contracte i s'ha constatat que la seva execució no ha estat satisfactòria i l'Ajuntament té la facultat de procedir a la no devolució de la garantia definitiva.*

*- Ha quedat demostrat a l'expedient administratiu que [REDACTED] ha fer complert satisfactòriament l'execució del seu contracte, deixant de fer funcions que li pertocaven com signatures d'acta de visita d'obres, no existia cap preu contradictori aprovat ni signat, tot i que sí estaven discutits entre el DEO i l'empresa constructora, no es va presentar en el seu moment informe desviació pressupost, entre d'altres.*

*- Certament que aquesta documentació va ser finalment aportada, però fora de termini i després de diversos requeriments fets per l'Administració i amb advertiment de incoació de procediments de penalitats».*



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: [REDACTED]
Data i hora 05/06/2025 15:25	Signat per [REDACTED]	



Por tanto, la confiscación de la garantía que ha acordado la Administración no consiste en la imposición de ninguna penalidad, y menos aún de una multa coercitiva, como entiende erróneamente la parte actora; sino en la facultad que deriva directamente de la Ley de Contratos del Sector Público para no proceder a la devolución de la garantía en caso de cumplimiento defectuoso del contrato.

De esta forma, procede analizar si la incautación de la garantía puede hallar amparo en la Ley de Contratos del Sector Público.

Con carácter previo, conviene advertir que, contrariamente a lo que se indica en las resoluciones administrativas impugnadas, la Ley de Contratos del Sector Público que resulta aplicable al supuesto de autos no es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sino la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que es la que se encontraba en vigor al tiempo de formalizarse el contrato, y a la que éste se refirió expresamente para regular todo aquello no previsto en el contrato y en los pliegos de condiciones, como se ha dicho anteriormente.

La Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007 (en adelante "LCSP") regula en el artículo 88 las responsabilidades a que están afectas las garantías:

"La garantía responderá de los siguientes conceptos:

- a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 196.
- b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
- c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
- d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato".

Y en el artículo 90 se ocupa de la devolución y cancelación de las garantías:

"1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: [REDACTED]	
Data i hora 05/06/2025 15:25	Signat per [REDACTED]		



3. En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 88.

Quando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, el plazo se reducirá a seis meses”.

El Decret número 2022/1496, por el que se acordó la confiscación de la garantía, no especifica en concreto cuál es el concepto del que debe responder la garantía que ordena incautar, pues, fuera de las penalidades impuestas al contratista (apartado a]), la resolución del contrato (apartado c]), o los vicios o defectos de bienes suministrados en caso de que se trate de un contrato de suministro que no se corresponde con el de autos (apartado d]), el apartado b] del artículo 88 LCSP se refiere a distintos conceptos, a saber: i) la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, ii) los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y iii) los daños y perjuicios ocasionados a la Administración con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolución.

Tampoco lo especifica el Decret número 2022/2013, por el que se desestima el recurso de reposición contra el Decret número 2022/1496, si bien al reproducir el informe emitido por la técnica superior en Derecho de la Unitat de Contractació i Compres, como se ha visto, refiere que la ejecución del contrato no ha sido satisfactoria, y que la recurrente ha dejado de realizar funciones que le correspondían. De lo que puede inferirse que la Administración confisca la garantía para responder de “la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato”, en los términos empleados por el artículo 88 b] LCSP.

La Administración pretende justificar la insatisfactoria ejecución del contrato en el informe realizado por [REDACTED] (folios 1.172 a 1.315 del expediente administrativo), cuyas conclusiones es necesario reproducir aquí:

*«Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents, cal esmentar que no s’ha trobat cap incompliment greu o significatiu de la normativa d’aplicació pel que fa al procediment de licitació i adjudicació del contracte, més enllà del retard en l’execució de les obres, fet que s’explica en part per l’estat d’alarma derivat de la pandèmia, i que va ser acceptat per part de l’òrgan de contractació, havent ampliat en dues ocasions el termini d’execució de les obres. No obstant, cal esmentar que s’han detectat petites incidències que no revesteixen gravetat ni tenen cap incidència en l’adjudicació del contracte, de les quals s’ofereix un detall a continuació:*

*- L’adjudicació del contracte es va produir fora de termini. D’acord amb l’article 158.2 de la LCSP i amb els plecs que regeixen la licitació, el termini per a l’adjudicació*



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: [REDACTED]
Data i hora 05/06/2025 15:25	Signat per [REDACTED]	



del contracte era de 2 mesos a comptar des de la data d'obertura de les proposicions, però en aquest cas concret van passar 78 dies. No obstant, cal esmentar que aquest incompliment no té cap efecte, quan l'òrgan de contractació incompleix el termini per adjudicar un contracte, aquest incompliment només comporta la possibilitat que els licitadors puguin retirar les seves ofertes (sense cap penalització, s'entén), seguint en aquest cas el procediment de contractació sense les ofertes retirades. En cap cas no procedirà, com a conseqüència d'aquest incompliment, la nul·litat de l'adjudicació.

- Pel que fa al nomenament dels membres de la mesa de contractació, s'han detectat alguns defectes de forma i incongruències:

a) A la clàusula 1.13 del PCAP es va definir que el president de la mesa seria el Gerent del Consorci Can Filuà, però hem observat com la persona que ha presidit la mesa és el tinent d'alcalde.

b) A més es va determinar que hi hauria dos membres de l'Institut Català del Sol, però a cap de les actes de la mesa hi va assistir cap membre d'aquesta entitat.

D'altra banda, en relació amb l'execució de l'obra, i sense entrar a valorar tècnicament la correcta execució de la mateixa, voldriem fer algunes observacions en relació amb la gestió documental i de comunicació que s'ha produït entre els diferents participants en la mateixa. De la lectura de tota la documentació que integra l'expedient d'adjudicació i execució de l'obra, considerem que cal remarcar els següents fets:

- D'acord amb l'informe emès en data 21 d'octubre de 2021 per part de la tècnica de l'Ajuntament que va ser responsable de l'obra des del seu inici fins el 24 de març de 2021 (informe que es va emetre a petició del Decret d'Alcaldia 2021/2290), es va comunicar durant els mesos de març i abril de 2020 al Director d'Obra (en endavant, DO) i al Director d'Execució de l'Obra (en endavant, DEO) la necessitat de realitzar un estudi de desviacions econòmiques, la qual cosa va exigir per mitjà de correu electrònic en dates posteriors successives (31/07/2020, 15/09/2020, 22/09/2020, 02/11/2020, etc.). Aquest fet deixa palès que des de començaments de l'obra ja es van posar de manifest desviacions econòmiques no previstes en el projecte de l'obra.

- A l'informe tècnic que es va emetre sobre la certificació d'obra nº 13 (relativa al mes d'octubre de 2020) es va posar de manifest per escrit que existia un desviament pressupostari que obligava a trametre una modificació del contracte, i que l'obra estava alentida i no es complia el pla de treball. Aquest informe tècnic es va signar en data 22 de desembre de 2020. Aquesta és la primera evidència obtinguda per l'equip d'auditoria relativa a aquest fet, en termes cronològics.

- A l'informe tècnic sobre la certificació nº 14 (relativa al mes de novembre de 2020 i signat per la tècnica de l'Ajuntament el 25 de gener de 2021), s'hi indicava que els agents de l'edificació estaven treballant en solucionar problemes econòmics d'increment d'amidaments i la generació de preus contradictoris, indicant que se'n faria un informe específic el proper mes. Cal esmentar que, com ja s'ha indicat amb anterioritat, l'estudi de desviacions econòmiques es portava sol·licitant des de feia mesos.

- A l'informe tècnic sobre la certificació nº 15 (relativa al mes de desembre de 2020 i signat per la tècnica de l'Ajuntament el 6 d'abril de 2021), s'hi indica finalment que existeix un augment de pressupost per ampliació d'amidaments i generació de preus contradictoris, i es demana al DO la redacció d'un projecte modificat.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:  
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:

Data i hora  
05/06/2025  
15:25

Signat per [redacted];



- No és fins el juny de 2021 que es formalitza l'acta de preus contradictoris, la qual entra al Registre de l'Ajuntament l'1 de juliol de 2021, quan l'obra ja està pràcticament finalitzada (a l'acta de visita d'obra del 23 de juny de 2021 s'hi indica que l'obra està acabada, només queden petits repassos per fer).

- Tal i com expressa el tècnic de l'Ajuntament responsable de l'obra des del 24 de març de 2021 fins al seu acabament, en informe emès a petició del Decret 2021/2290, les actes de visita d'obra es trobaven sense signar. A més, constata que no existia cap preu contradictori aprovat ni signat, tot i que sí estaven discutits entre el DEO i l'empresa constructora. Quan aquest tècnic pren la responsabilitat tècnica de l'obra, el DO i el DEO van comunicar que hi havia un desviament econòmic aproximat d'un 21%, fet que havia estat comunicat a l'Ajuntament al febrer de 2021.

- A l'acta de visita d'obra nº 28, de data 2 de setembre de 2020, s'hi indica que l'obra continua sense incidències remarcables. Malgrat això, com s'ha comentat anteriorment, d'acord amb l'informe emès per la tècnica de l'Ajuntament en data 21 d'octubre de 2021, des dels mesos de març i abril de 2020 els responsables de l'obra ja eren coneixedors que existien desviaments en el pressupost.

- A l'acta de visita d'obra nº 40, de data 13 de gener de 2021, s'hi informa que s'ha produït una reunió a l'Ajuntament amb el tinent d'alcalde i altres membres de la Corporació on se'ls va informar de la necessitat de formalitzar una modificació del contracte.

- L'informe de desviaments del pressupost no va ser presentat pel DEO a l'Ajuntament fins el 3 de juny de 2021, tot i que va ser sol·licitat pels tècnics de l'Ajuntament de manera informal des de l'abril de 2020, i per escrit per primera vegada el 31 de juliol de 2020 per mitjà de correu electrònic.

- Si bé s'ha posat de manifest que almenys des de la data de la certificació d'obra nº 13, corresponent al mes d'octubre de 2020, es té coneixement per part dels responsables de l'obra que existeix una desviació pressupostària que obliga a tramitar una modificació del contracte, l'Ajuntament no sol·licita al DO l'esmena del projecte inicial i redacció de memòria, plànols i pressupost per tramitar la modificació del projecte fins el 24 de març de 2021, mitjançant el Decret 2021/734. El projecte definitiu no va ser entregat a l'Ajuntament fins el 9 de juliol de 2021, després de passar per diverses esmenes i modificacions prèvies, pràcticament un any després a que l'Ajuntament sol·licités per correu electrònic al DO i DEO que elaboressin un informe de desviacions econòmiques.

- Les actes de visita d'obra facilitades a l'equip d'auditoria no estan signades pel representant responsable de l'Ajuntament, mentre que sí que hi consta la signatura de la direcció d'obra, l'empresa constructora i la direcció d'execució de l'obra. A més, a 10 de les 53 visites d'obra analitzades no hi consta l'assistència del representant responsable de l'Ajuntament, entre novembre de 2019 i octubre de 2020. A partir d'aleshores consta l'assistència de la propietat a les visites d'obra. Aquest fet posa de manifest indicis d'una certa manca de rigor en la tasca de fiscalització i control portada a terme per l'Ajuntament.

- A 9 de les actes de visita d'obra de l'any 2020 no s'ha pogut acreditar l'assistència del DO, tot i que aquestes sí que consten signades per ell.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: [REDACTED]
Data i hora 05/06/2025 15:25	Signat per [REDACTED]	



A la vista dels fets descrits, considerem que es poden extreure les següents conclusions en relació amb l'execució de l'obra i la gestió documental i de comunicació per parts dels diferents actors de l'obra:

- D'acord amb l'article 43.4 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, les ordres i les instruccions de la direcció de l'obra s'han de donar per escrit i n'ha de quedar constància en el llibre d'ordres, el qual no pot ésser manipulable, i ha de tenir el visat del promotor o, si escau, del gestor en la data de comprovació del replanteig. Les ordres i les instruccions han d'estar permanentment a disposició del promotor i del gestor, si escau. Hi ha indicis que la gestió documental del llibre d'ordres i les actes de visita d'obra no ha estat adequada.

- L'article 162.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques s'expressa en els següents termes: 2. Quan sigui necessària l'execució d'unitats noves no previstes al projecte, el director de les obres elevarà a l'òrgan de contractació les propostes dels preus nous i la repercussió sobre el termini d'execució del contracte. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la variació del termini total de l'obra serà condició necessària per poder començar els treballs corresponents a les unitats noves. Tot i que hi ha indicis que el DO tenia coneixement de l'existència de preus contradictoris des del mes d'abril de 2020, no va comunicar-ho formalment a l'òrgan de contractació fins al mes de gener de 2021.

- D'acord amb l'article 242 de la Llei 9/2017, el DO ha de demanar autorització per iniciar expedient de modificació, quan consideri necessària la modificació del projecte. Aquesta autorització no va ser demanada pel DO en cap moment, va ser la propietat qui va instar al DO que redactés un projecte modificat de l'obra al març de 2021.

- Considerem que la diligència en la comunicació de les desviacions econòmiques del projecte per part del DO i el DEO no ha estat adequada, atès que han transcorregut com a mínim 6 mesos fins que es va comunicar als responsables de l'Ajuntament. A més, el DEO no va entregar fins el 3 de juny de 2021 l'estudi de desviacions econòmiques i el DO no va entregar la versió definitiva del projecte modificat fins el 9 de juliol de 2021. Per tant, hi ha hagut un retard difícilment justificable pel que fa a la gestió econòmica de l'obra per part dels responsables de la mateixa.

- En relació amb l'actuació per part de la propietat, considerem que no s'ha actuat amb rigor suficient per a agilitzar la gestió del desviament econòmic de l'obra. Tot i que des del mes de març de 2020 es tenia constància de l'existència de desviaments econòmics i des del mes d'octubre de 2020 es va deixar palès a informes tècnics que calia realitzar una modificació contractual, a causa de les desviacions econòmiques detectades, no va ser fins el 24 de març de 2021 que es va sol·licitar de manera oficial la redacció d'un projecte modificat.

Per tant, com a conclusió general, la conclusió de la feina realitzada en quant al procediment de licitació i adjudicació és satisfactòria.

Pel que fa a l'execució tècnica de l'obra, d'acord amb les conclusions de l'informe dels pèrits que s'annexa, aquesta es satisfactòria. Aquest informe ha estat emès per un tercer independent i no ens fem responsables de les conclusions del mateix.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:  
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:

Data i hora  
05/06/2025  
15:25

Signat per [redacted];



*Finalment, pel que fa a l'execució de l'obra en la seva vessant documental i de gestió econòmica, aquesta ha estat clarament millorable i cal concloure de manera no satisfactòria».*

Pues bien, dicho informe permite acreditar que la gestión documental y económica de la obra no fue satisfactoria, al ser claramente mejorable, como se indica en el mismo. Pero ello no es suficiente para justificar que la garantía depositada deba responder “de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato”.

Primero, se desconocen cuáles son exactamente esas “prestaciones” previstas en el contrato que no se habrían ejecutado correctamente, habida cuenta que el informe del auditor no se refiere específicamente a ninguna cláusula del contrato, o de sus correspondientes pliegos, para saber a qué prestación en concreto se está refiriendo.

Y segundo, y más importante, aun cuando pudieran deducirse cuáles son dichas prestaciones del contrato, lo que no ha resultado de ningún modo justificado es que de la correcta ejecución de las mismas deba responder la cuantía depositada como garantía, toda vez que no consta, porque la Administración no lo ha alegado, y menos aún lo ha cuantificado, que la “insatisfactoria ejecución del contrato” haya provocado al consistorio daño o perjuicio alguno, o la necesidad de realizar actuación alguna con cargo a dicha garantía. Sin que, desde luego, pueda ser admitido como tal perjuicio el lacónico “daño al pueblo” que invocó la parte demandada en el acto de la vista.

Por todo lo expuesto, procede estimar íntegramente el recurso contencioso-administrativo y, con anulación de la actuación administrativa impugnada, reconocer el derecho de la recurrente a obtener de la Administración demandada la devolución de la garantía confiscada por importe de 4.497 euros, más los intereses legales.

**CUARTO.-** En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar Sentencia o al resolver por Auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En este caso, al haber sido íntegramente estimadas las pretensiones de la demanda, y no presentar el caso serias dudas de hecho o de derecho, procede imponer las costas a la parte demandada, si bien limitando su cuantía, por todos los conceptos, a 500 euros, en uso de la facultad que confiere el artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del asunto y las actuaciones llevadas a cabo por las partes.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación,

## FALLO

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> [REDACTED], en representación de [REDACTED] frente al Decret número 2022/2013 dictado por el Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals del Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en fecha 5 de agosto de 2022, por el que se



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar:  
<https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html>

Codi Segur de Verificació:

Data i hora  
05/06/2025  
15:25

Signat per [REDACTED]



desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decret número 2022/1496 dictado por el mismo órgano en fecha 22 de junio de 2022, por el que se acuerda no devolver y confiscar a [REDACTED] la garantía por importe de 4.497 euros por cumplimiento no satisfactorio de la ejecución del contrato; y en consecuencia:

1.- Se anula y deja sin efecto la actuación administrativa impugnada.

2.- Se reconoce el derecho de [REDACTED] a obtener del AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE MOGODA la devolución de la garantía confiscada por importe de 4.497 euros, más los intereses legales.

3.- Se condena a la parte demandada al pago de las costas devengadas en este procedimiento, limitando su cuantía a 500 euros por todos los conceptos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que frente la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <a href="https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html">https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html</a>		Codi Segur de Verificació: [REDACTED]
Data i hora 05/06/2025 15:25	Signat per [REDACTED]	



## Mensaje LexNET - Notificación

Fecha Generación: 06/06/2025 14:21

## Mensaje

<b>IdLexNet</b>	202510784468626	
<b>Asunto</b>	Notifica resoluciÃ³ sentÃ	
<b>Remitente</b>	<b>Órgano</b>	JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU N. 2 de Barcelona, Barcelona [0801945002]
	<b>Tipo de órgano</b>	JDO. DE LO CONTENCIOSO
<b>Destinatarios</b>	[REDACTED]	[608]
	<b>Colegio de Procuradores</b>	Il-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona
<b>Fecha-hora envío</b>	06/06/2025 13:58:48	
<b>Documentos</b>	0801945002_20250606_0935_49170790_00.pdf(Principal) Hash del Documento: ca2f997e03abfd07f4cd90e0167e083fbd1bee6de2e95da02a2b85581c920af9	
<b>Datos del mensaje</b>	<b>Procedimiento destino</b>	PAB Nº 0000521/2022
	<b>Detalle de acontecimiento</b>	Notifica resoluciÃ³ sentÃ

## Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
06/06/2025 14:21:16	[REDACTED] [608]-Il-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona	LO RECOGE	
06/06/2025 13:58:50	Il-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona (Barcelona)	LO REPARTE A	[REDACTED] [608]-Il-lustre Col·legi dels Procuradors de Barcelona

(\*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.